

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	JOSE JAIME IBARGUEN
DEMANDADOS	PROMOTORA ERRAGA S.A. Y MUROS Y TECHOS S.A. INGENIEROS ARQUITECTOS
PROCEDENCIA	Juzgado 25 Laboral del Circuito
RADICADO	05001 3105 023 2019 00678 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	Interlocutorio Nro. 05 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Niega prueba oficio a EPS
DECISIÓN	confirma

En la fecha, **veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a desatar el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la codemandada Promotora Erraga S.A, contra el auto proferido por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito, el 2 de diciembre de 2022, dentro del proceso ordinario promovido por **José Jaime Ibarguen** contra **esa sociedad, y** Muros y Techos S.A. Ingenieros Arquitectos, código radicado número 05001 3105 **023 2019 00678** 01.

Antecedentes

Para lo que interesa a esta instancia se tiene que el demandante pretende:

*"DECLARACION PRIMERA: su Despacho mediante Sentencia Declarare, que entre la entidad PROMOTORA ERRAGAS S.>A y el Señor JOSE JAIME IBARGUEN, **EXISTIO UN CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO, contrato que FUE TERMINADO INJUSTAMENTE** sin que existieran causas legales como lo determina el Código sustantivo de trabajo, por lo que la empresa deberá REINTEGRAR AL TRABAJADOR al cargo que venía ejerciendo desde el año 2016 o un cargo similar de acuerdo capacidad de trabajo y le deberá pagarle **LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR** desde la fecha del despido hasta la sentencia que ponga fin al proceso, como SANCION RESARCITORIA DE PERJUICIOS.*

DECLARACION SEGUNDA: su despacho mediante sentencia declarare, que el señor José Jaime Ibarguen, tiene derecho a la protección de la estabilidad laboral reforzada de conformidad con la ley 361 de 1997, por lo que la empresa deberá asumir por su propia cuenta todo el tratamiento médico que requiera con ocasión del accidente que padeció hasta lograr por completo la recuperación.

Consecuencialmente de las anteriores Declaraciones, su despacho hará las siguientes condenas:

1. Su Despacho CONDENARA a las entidades PROMOTORA ERRAGAS S.A, solidariamente, MUROS Y TECHOS S.A INGENEROS ARQUITECTOS, a que asuman de su propia cuenta todos los gastos que genere el tratamiento médico, quirúrgico y hospitalario a raíz de las patologías que padece el señor JOSE JAIME IBARGUEN.

*2. Su Despacho CONDENARA a la entidad PROMOTORA ERRAGAS S.A solidariamente MUROS Y TECHOS S.A INGENEROS ARQUITECTOS, a que le paguen el Señor JOSE JAIME IBARGUEN la suma de **1.528.635 PESOS**, correspondientes a **60 DIAS DE INCAPACIDADES** que no le fueron canceladas por el empleador, aunque estaban aprobadas para el pago por parte de la EPS SURA. (...)"*

Una vez admitida la demanda, debidamente notificadas las accionadas, el apoderado de la sociedad Erraga S.A presentó contestación solicitando entre otros, el decreto de la siguiente prueba:

“

Se oficie a la EPS SURA de ésta ciudad localizada en la Cra. 43 #30-28, Medellín, Antioquia para que certifique por escrito las razones económicas, médico científicas y administrativas en virtud de las cuales el demandante no fue pensionado. De igual forma para que informe al despacho el contenido de las reclamaciones presentadas por el actor con posterioridad a su desvinculación como trabajador por parte de Promotora Erraga S.A. acaecido el día 29 de julio de 2017.

”

En la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T y de la S.S., en la etapa de decreto de pruebas, la juez de la causa negó la prueba de oficiar a la EPS SURA, toda vez que la codemandada no cumplió con el requerimiento efectuado de que se allegara constancia de haber realizado gestiones tendientes a obtener la información requerida por el exhorto, atendiendo a lo previsto en el artículo 173 del Código General Del Proceso; y adicionalmente, a que conforme a la fijación del litigio dicha prueba no la consideraba necesaria ni pertinente.

Inconforme con la decisión, el apoderado de la Promotora Erraga S.A., **interpuso el recurso de reposición y apelación**, manifestando su desacuerdo, aduciendo que se presentaron varias solicitudes a la EPS para que manifestasen el motivo para no pensionaron al demandante o no someterlo a la junta médica para determinar su estado, pero la entidad no respondió, sin que hubiese sido posible allegar ello al juzgado al momento de la contestación, y que en razón a que la EPS no quiso responder se pidió al despacho.

Agregó que el objeto de la prueba, su pertinencia obedecía a que hay una errónea concepción del pago de las incapacidades por parte del actor, pues este en la demanda afirma que las cobró a la EPS directamente durante 180 días y luego que, realizada la desvinculación, estuvo incapacitado 60 días que los tiene que cubrir el empleador, lo que es equivocado, pues las incapacidades las cancela directamente el patrono con cargo a la EPS, y cuando se realiza la desvinculación del trabajador es la EPS quien asume el pago cuando han pasado los 180 sin pronóstico favorable, luego el demandante malinterpreta el procedimiento diciendo que son de cargo de la EPS los 180 días y posteriormente que será el patrono quien le tiene que pagar

los 66 días restantes, de ahí viene la solicitud de que la EPS certifique porque no actuó conforme a ley, pues realizada la desafiliación, éste sigue con un cubrimiento durante dos meses, y el actor únicamente tuvo una incapacidad de mes y medio.

La juez de la causa mantuvo su decisión en cuanto a la negación de la prueba, reiterando que no se aportó constancia de haber solicitado ante la EPS la información que se peticiona por intermedio del juzgado, y la impertinencia atendiendo a la fijación del litigio, pero al estimar debidamente sustentado el recurso de alzada lo concedió ante esta Corporación.

Del traslado para alegar, no hicieron uso las partes

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

Teniendo en cuenta la decisión adoptada y la inconformidad del recurrente, habrá de determinarse si hay lugar o no a decretar como prueba:

“

Se oficie a la EPS SURA de ésta ciudad localizada en la Cra. 43 #30-28, Medellín, Antioquia para que certifique por escrito las razones económicas, médico científicas y administrativas en virtud de las cuales el demandante no fue pensionado. De igual forma para que informe al despacho el contenido de las reclamaciones presentadas por el actor con posterioridad a su desvinculación como trabajador por parte de Promotora Erraga S.A. acaecido el día 29 de julio de 2017.

”

Dos argumentos planteó la juez de conocimiento para negar el medio de convicción, los cuales comparte esta Corporación por las siguientes razones:

- 1) Respecto a que no se allegó constancia de haber realizado gestiones previas tendientes a obtener la información hoy requerida por oficio.

El Código General del Proceso a la letra dispone:

"ARTÍCULO 173. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.

*En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. **El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.***

El aparte resaltado fue declarado exequible por la sentencia C-099-2022, en la cual la Corte, *se refirió a la relevancia y admisibilidad constitucional de las "cargas procesales" en nuestro ordenamiento jurídico. Y resaltó que junto a ellas la justicia y la verdad son el fundamento de la adjudicación de derechos en todos los ámbitos de la vida de las personas, por lo cual la garantía del derecho a probar, se constituye en el modo de lograr justicia y verdad en un escenario procesal.*

A continuación, realizó un test de proporcionalidad para determinar si las normas acusadas están suficientemente justificadas y sus consecuencias son constitucionalmente admisibles. Encontró que: (i) los contenidos normativos acusados persiguen la realización de importantes principios constitucionales, en tanto se inscriben dentro de las llamadas cargas procesales que aluden a la organización de un proceso judicial con carácter dispositivo, de tal manera que garantice los principios de igualdad de las partes y lealtad procesal, sin afectar los principios de imparcialidad e independencia del juez.

(ii) Los contenidos normativos acusados constituyen un medio adecuado para realizar los principios constitucionales de igualdad toda vez que las cargas procesales que contienen contribuyen con lo propio de manera efectiva ya que su cumplimiento permite organizar el adelantamiento del proceso, de tal manera que éste no resulte caótico.

(iii) Las normas acusadas no son evidentemente desproporcionadas porque está justificada la afectación de aquellos principios que promocionan la verdad como justicia, en favor de aquellos que promocionan la imparcialidad, la igualdad y la lealtad como justicia.

La Corte indicó que una de las formas en la que se satisface la verdad en el proceso como forma de justicia, *es precisamente obligando a las partes a cumplir con sus cargas procesales, y así al juez a honrar dicha obligación. Por eso no es razonable sostener que tras perder la oportunidad procesal de aportar una prueba al expediente se configura una afectación desproporcionada del propósito constitucional del derecho a la prueba (hallar la verdad y con base en ella adjudicar derechos), cuando ello tiene como causa el incumplimiento de uno de los medios para ello, cual es el establecimiento de cargas procesales en materia probatoria.*

Por demás recabó en que una prueba que no se decrete en el proceso con base en el incumplimiento de una regla procesal (carga procesal) no significa que se ha sacrificado el derecho sustancial por privilegiar las formas (artículo 29 superior). ***Esto por cuanto, de un lado la consecución de la prueba se constituye como una obligación de medio y no de resultado; la prueba garantiza una posibilidad y no una certeza en cuanto a la verdad en el proceso. Y de otro lado dichos preceptos analizados no afectan la facultad oficiosa del juez para decretar pruebas; siempre podrá hacerlo si así lo considera en aras de llegar a la certeza en la definición.***"¹

En el caso concreto, es claro que la parte interesada incumplió con la regla procesal, pues, aunque el recurrente afirma que solicitó en varias oportunidades a la EPS lo que hoy pretende mediante oficio, lo cierto

¹ Corte Constitucional-Comunicado de Prensa No. 8 del 16 y 17 de marzo de 2022. SON CONSTITUCIONALES LAS NORMAS PROCESALES QUE EXIGEN A LAS PARTES DEBERES EN RELACIÓN CON LA CONSECUCCIÓN DE PRUEBAS - SENTENCIA C-099-22
M.P. Karen Caselles Hernández

es que no acreditó sumariamente que efectivamente hubiese realizado esas peticiones, y es que nótese que con la contestación presentada el 19 de marzo de 2019 no se allegaron siquiera las constancias de las presuntas peticiones realizadas, e incluso en providencia del 14 de junio del año 2022, notificada por estados Nro. 082 del día siguiente, la juez de la causa requirió a la sociedad en los siguientes términos:

"Previo a resolver sobre el oficio solicitado como prueba por parte de PROMOTORA ERRAGAS S.A., se le REQUIERE para que en el término de tres (3) días allegue la constancia de radicación elevada ante la entidad, de conformidad con lo establecido en inciso segundo del artículo 173 C.P.G aplicable por remisión analógica al procedimiento laboral.

Sin que tampoco la sociedad allegara las constancias de las peticiones entregadas a la EPS, luego es claro el incumplimiento de la carga procesal que tenía la parte interesada en la prueba.

2) En los términos que se plantea el oficio pretendido es innecesario

Pues precisamente en la fijación del litigio se estableció:

"... deberá determinarse si el señor José Jaime Ibarguen, laboró al servicio del PROMOTORA ERRAGA S.A, desde el 01 de marzo del 2016, y bajo que modalidad de contratación (contrato a término indefinido u obra o labor determinada), si al momento de la terminación del contrato el señor Ibarguen se encontraba incapacitado, configurando su despido, el 29 de julio del 2017, como injustificado, y en consecuencia establecer si existe derecho a reintegro laboral del actor por encontrarse cobijado por la estabilidad laboral reforzada que predica la Ley 361 del 2007.

Como consecuencia de lo anterior, se determinará si el señor José Jaime Ibarguen tiene derecho a que se le reconozcan y pague las prestaciones sociales y salarios, dejadas de percibir entre la fecha del despido y la fecha del reintegro de ser el caso, además de las indemnizaciones a que haya lugar.

Se definirá, además, si corresponde a la demandada PROMOTORA ERRAGA S.A. el pago de 60 días de incapacidad y gastos médicos, en los que ha incurrido el señor Ibarguen, a raíz del accidente sufrido el 29 de enero del 2017. Y si hay lugar al pago de la indemnización de que trata la ley 361 de 1997 (se ajusta el año citado de esta ley en la demanda).

Si es procedente la condena por horas extras ordinarias y festivas, el calzado y vestido de labor en la suma relacionada en las pretensiones.

De manera subsidiaria, si hay lugar al pago de la indemnización por despido y de la sanción moratoria establecida en el art., 65 del CST y en el art 99 de la ley 50 de 1990, los intereses moratorios y la indexación de las condenas.

Se habrá de establecer la solidaridad entre PROMOTORA ERRAGA S.A. y MUROS Y TECHOS S.A INGENIERGOS ARQUITECTOS, para el pago de las posibles condenas.

Respecto de lo cual, coincide la Sala, en que como está planteada la prueba solicitada es innecesaria, entendiéndose como superflua, por lo que pasa a explicarse:

En materia laboral, el artículo 53 del C.P.L y de la S.S. establece que:

*"El juez podrá, en **decisión motivada**, rechazar la práctica de pruebas y diligencias **inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito**.*

...."

La doctrina en relación a lo que se ha definido por conducencia, ha señalado que es, «la idoneidad legal que tiene la prueba para demostrar determinado hecho»; así mismo, respecto a la pertinencia se ha explicado que «es la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba en éste»; sin embargo, suele ocurrir que las pruebas conducentes y pertinentes pueden ser rechazadas por resultar inútiles o superfluas.

En el asunto concreto, para esta Corporación, como se plantea el oficio solicitado, respecto a que la EPS certifique las razones del porque el actor no fue pensionado, **no guarda coherencia con el objeto del pleito, con la competencia de una entidad promotora de Salud, ni es claro en su pedimento, luego en los términos planteados no**

aportaría, a juicio de la Sala, nada al esclarecimiento del litigio fijado.

Aunado a que es la juez de conocimiento, quien conforme a las disposiciones y procedimientos legales y consideraciones jurisprudenciales en la materia, determinará si a la demandada le corresponde o no asumir el pago de las incapacidades pretendidas, y para ello incluso en virtud del artículo 54 del estatuto procesal laboral, el juez tiene la facultad de decretar y practicar pruebas de oficio, así lo establece la disposición en cita: *"además de las pruebas pedidas, el juez podrá ordenar a costa de una de las partes, o de ambas, según a quien o a quienes aproveche, **la práctica de todas aquéllas que a su juicio sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos.**"*(resalto fuera del texto)

En ese orden de ideas, será la juez de conocimiento, como directora del proceso, quien si lo considera indispensable, **a su juicio**, podrá en este caso, atendiendo a las situaciones fácticas, fundamentos de derecho y para mejor proveer, decretar y practicar otras pruebas que eventualmente discurra pertinentes, ello teniendo en cuenta, que en material laboral se busca la verdad real por encima de la meramente formal, y precisamente en virtud a la naturaleza tuitiva del derecho del trabajo y de la seguridad social, **el juzgador debe actuar para superar las deficiencias probatorias o de gestión judicial que puedan presentarse a fin de evitar una irreparable decisión de privar de un derecho a quien realmente se le debe reconocer.**

Sin que pueda perderse de vista, tal y como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional que, *el funcionario deberá decretar pruebas*

*oficiosamente: (i) cuando a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer asuntos indefinidos de la controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o (iii) cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia material.*² Lo que se armoniza con la unificación de jurisprudencia sobre facultades oficiosas en materia probatoria de los jueces laborales, que estableció la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-219 del 06 de mayo de 2021, en la cual se recuerda que en los casos en donde “*de no acudir a nuevos elementos probatorios la sentencia final sea contraria a los postulados de la justicia o a la naturaleza tutelar del derecho laboral*”, decretar y practicar pruebas de manera oficiosa pasa de ser una facultad a ser un imperativo para el juez.

En ese orden de ideas habrá de **confirmarse** la decisión primigenia.

Sin costas en esta instancia al no haberse causado.

En merito lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, confirma** la decisión adoptada por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín, el 2 de diciembre de 2022, dentro del proceso ordinario laboral de fecha y origen conocido, en cuanto negó la prueba de oficiar a la EPS SURA, conforme a lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

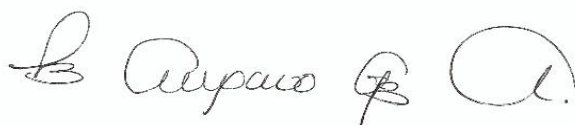
Sin costas en esta instancia al no haberse causado.

² Sentencia T-113-2019

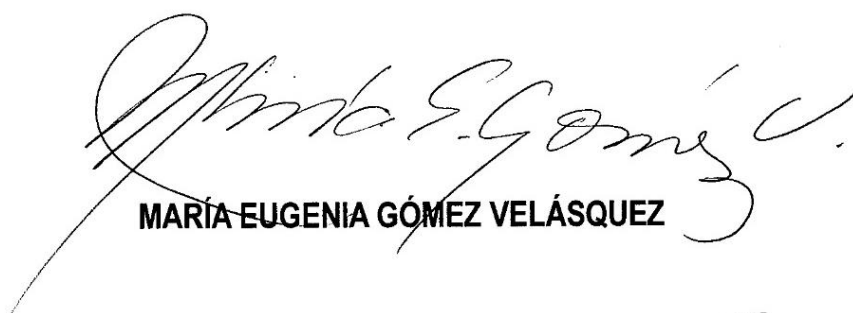
Por Secretaría remítase el expediente digital con la presente actuación al Juzgado de origen para que se continúe con el trámite pertinente.

Lo resuelto se notifica a las partes por **estados virtuales**, en virtud de lo dispuesto en artículo 295 C.G. del P, en concordancia con el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022.

Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados No. 32 del 24 de febrero de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>